

## **México: sismos, capitalismo del desastre y resistencia**

*Gerardo Rénique*  
*City College of the City*  
*University of New York*

Pasados casi tres meses después que una extensa región del país fuera remecida por dos catastróficos terremotos de 8.5 y 7.1 grados en la escala de Richter respectivamente, miles de familias siguen acampadas en calles y plazas, pernoctando en viviendas inseguras mientras que cientos de escuelas, hospitales y centros de salud permanecen cerrados u operando en condiciones precarias. Al mismo tiempo las empresas constructoras, distribuidoras de materiales de construcción e instituciones financieras ya empezaron a beneficiarse tanto de los fondos de asistencia distribuidos entre los damnificados, como de los presupuestos destinados a la reconstrucción.

Con epicentro en el sur-sureste y en las cercanías de la capital respectivamente, los sismos del 7 y 19 de setiembre han provocado la peor catástrofe en la reciente historia mexicana. Si bien cobraron un número de vidas (471) mucho menor que las 10,000 del terremoto del 12 de diciembre de 1985, ocasionaron sin embargo destrozos sin precedentes en una extensa región que abarca desde algunos de los municipios rurales más pobres del país en los estados de Oaxaca, Chiapas y Guerrero hasta barrios de clase media profesional en Ciudad de México. Poblaciones rurales en los cercanos estados de Puebla, Morelos, México y Tlaxcala también fueron seriamente afectadas.

Según estimados oficiales más de 250,000 las familias quedaron desamparadas y se destruyeron aproximadamente 150,000 viviendas; 325,000 establecimientos industriales y comerciales; más de 12,600 escuelas, así como numerosos hospitales. Si bien la catástrofe tuvo su origen en particularmente violentos e impredecibles fenómenos tectónicos esta fue potenciada tanto por la ineficiencia y corrupción gubernamental, como por la catástrofe social producto de las brutales políticas de austeridad de las tres últimas décadas. Teniendo como trasfondo una grave crisis consecuencia del estrepitoso fracaso de las reformas económicas y políticas del presidente Enrique Peña Nieto, magnificada por el exponencial incremento tanto de la violencia asociada con la llamada guerra contra el narco, como la del autoritarismo y represión gubernamentales, el descontento e indignación de la ciudadanía ante la ineptitud, desidia y corrupción estatal ante la

catástrofe ocasionada por los sismos amenaza con ensanchar la constelación de resistencias y movimientos político-sociales que constituyen el difuso y heterogéneo campo de la oposición.

### ***Austeridad, capitalismo del desastre y militarización***

Los sismos han remecido también las resquebrajadas estructuras del sistema político mexicano cuyas prácticas paternalistas-autoritarias de control social se intensificaron de forma paralela con la polarización económico-social extrema que ha hecho de México [uno de los países con más ricos en el mundo](#) así como uno con el mayor número de pobres.

Desigualdad extrema que tuvo su origen en la estrategia de modernización neoliberal que, con el auspicio y fiscalización del FMI, BM y BID, fuera adoptada por el presidente Miguel de la Madrid (1982-1988) para hacer frente a una galopante deuda externa. Modernización asentada en dos políticas fundamentales: una rigurosa austeridad fiscal que afectó a la gran mayoría de trabajadores, profesionales y población rural; y la privatización masiva de empresas públicas y estatales que beneficiaron a un reducido grupo de hombres de negocios. Selecto y reducido grupo empresarial que expandió aún más su poder y riqueza con la conversión de la deuda de la banca privada en una estratosférica deuda pública durante la presidencia de Ernesto Zedillo (1994-2000). A partir de este momento, en palabras de [John Saxe-Hernández](#)—“se acentuó, como nunca antes en la historia, la capacidad de los dueños del capital en México de capturar los instrumentos de Estado.”

La reconstrucción de la Ciudad de México creó también oportunidades para acrecentar aún más las fortunas y el poder político de la fracción financiera de la primera generación de billonarios del país -- acertadamente bautizados por el diario *La Jornada* como los “*Forbes barons*.” Carlos Slim el más conspicuo miembro de este grupo -- beneficiario de la privatización del Banco Nacional de México y de la empresa telefónica estatal, TELMEX-- fue nombrado por el presidente De la Madrid como el encargado de formar entre el sector privado el comité consultivo responsable de la financiación y reconstrucción del Centro Histórico de la Ciudad de México. La zona más emblemática y de mayor densidad poblacional que, si bien seriamente devastada por el terremoto, se

encontraba altamente tugurizada y con deficientes servicios e infraestructura producto de décadas de descuido y falta de inversión pública. La asociación entre el sector financiero y las grandes constructoras se extendió también hacia otras zonas devastadas por el sismo hacia el sur de la ciudad las cuales experimentaron desde fines de la década de los ochenta un boom inmobiliario sin precedentes.

Tres décadas más tarde y después de otra catástrofe sísmica y por disposición presidencial se da nuevamente primacía a estos mismos grandes empresarios en la reconstrucción cuyos costos se estima superan largamente la reconstrucción que siguió al terremoto de 1985. El 27 de setiembre flanqueado nada menos que por Carlos Slim y ante un selecto auditorio formada por los empresarios más ricos del país, el presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) anuncio su estrategia para la reconstrucción. La columna vertebral de su esquema la constituirá el fideicomiso [Fuerza México](#). Formado con fondos provenientes del sector público, contribuciones empresariales, donaciones individuales e institucionales, Fuerza México será administrado por un comité de hombres de negocios elegidos entre ellos mismos. Los fondos serán destinados a la reconstrucción de infraestructura, escuelas, hospitales y edificaciones de importancia histórica. Parte de estos también serán distribuidos directamente entre los damnificados en forma [de tarjetas de débito](#) (“monederos electrónicos”) destinadas a la reconstrucción de viviendas.

Familias cuyos hogares fueron parcialmente destruidos recibirán 30,000 pesos y 120,000 pesos (aproximadamente \$ 6400 dólares) las que sufrieron pérdida total de sus viviendas. Dinero que, como lo han manifestado tanto pobladores de zonas como especialistas, solo será suficiente para cubrir los costos de los cimientos de una vivienda. Aunque insuficientes estos fondos de asistencia constituyen empero un importante estímulo para la industria de la construcción que durante el año pasado experimento una caída de 3.7 puntos porcentuales. Durante la teatralizada y publicitada ceremonia presidencial de entrega de las primeras tarjetas de compra en una de las ciudades más afectadas la población local no solo expreso su descontento con la “miseria del apoyo” sino que además manifestó su indignación por su falta de acceso a cajeros automáticos y por lo que consideraron como “el negocio redondo del gobierno federal.” Ni bien termino distribución de las tarjetas de crédito una larga cola de camiones transportando cemento y

materiales construcción ingreso a la plaza principal de Ixtepec portando lonas inscritas con las leyenda: “[En este esta establecimiento de acepta la tarjeta](#) para compra de materiales #FuerzaMéxico”, “Aceros y Cementos de OaxacaAcemos” y “#FuerzaMéxico Holcim. En este establecimiento se acepta la tarjeta para compra de materiales.”

Las tres décadas transcurridas entre las dos mayores catástrofes sísmicas en la historia del país develan la estrecha relación entre capital financiero y desastre. Los sismos en primera instancia han contribuido a solidificar la relación simbiótica del empresariado surgido con las reformas liberales de la década de los ochenta con el estado y su –hasta ahora partido oficial. Con la complicidad estatal las catástrofes provocadas por los sismos crearon las condiciones ideales para la expansión de las fuentes de ganancia del gran capital en forma modélica de lo que [Naomi Klein](#) acertadamente describe como capitalismo del desastre. Siendo uno de sus propósitos centrales la reconstitución social y económica de las comunidades afectadas, la industria de la reconstrucción y del desarrollo inmobiliario requiere también de la reconfiguración del rol de los militares lo que representa un peligrosa y amenazante intensificación de las tendencias autoritarias del estado mexicano.

Con este propósito el gobierno federal concibió el llamado PLAN MX una iniciativa estratégica federal que delega al ejército y la marina las responsabilidades de administración y gobernanza de futuros desastres naturales. El PLAN MX funciona de manera conjunta con el PLAN DN-II, un instrumento operativo concebido en 1966 que expande el protocolo creado durante la Guerra Fría por el cual se re conceptualizan los desastres “civiles” y “naturales” como prioritarios para la defensa nacional. Como tal, el plan delega las responsabilidades de todas las operaciones de rescate, asistencia y recuperación al ejército y a la marina bajo la dirección presidencial. La implementación de ambos planes bien podría crear condiciones para la militarización de las zonas de desastre. Un día después del sismo del 7 de setiembre [el gobierno movilizo aproximadamente 3000 efectivos militares](#) en las regiones más afectadas en los estados de Chiapas y Oaxaca.

Estados en los que durante las últimas décadas la población mayoritariamente indígena de estos estados ha sido objeto de una sistemática represión policial, militar y para-militar. Considerados entre las entidades más pobres del país son también conocidos

por la capacidad de resistencia y rebeldía de sus comunidades en defensa de sus territorios, recursos y autonomía. Contra estas comunidades el gobierno recurrió a la militarización como mecanismo de control de la protesta social y como mecanismo de asegurar la tranquilidad en territorios a los cuales se quiere atraer inversionistas interesados en el desarrollo de parques industriales, proyectos eólicos y mineros, así como para el establecimiento de [Zonas Económicas Especiales](#). Después del sismo las tropas en Oaxaca acantonadas en Oaxaca se emplazaron en San Mateo del Mar y otras comunidades en la región del Istmo en donde existe una fuerte resistencia local a la expropiación territorial, privatización de tierras, proyectos extractivistas y en donde existe también un fuerte apoyo comunal a la lucha magisterial en contra de la reforma educativa de EPN.

### ***Boom inmobiliario y extractivista, corrupción e ineptitud estatal***

En las postrimerías del devastador terremoto de 1985, las fuertes críticas de académicos y especialistas así como el descontento de la ciudadanía con la ineptitud estatal ante la emergencia, la desidia burocrática y la irresponsabilidad de empresas constructoras, considerados como agravantes de la alta mortalidad y devastación provocada por el sismo, forzaron al gobierno al establecimiento de un sistema nacional de protección civil, y a revisar los reglamentos de construcción civil de la Ciudad de México.

Con la colaboración y asistencia de expertos japoneses se creó un Sistema de Alerta Sísmica (SAS) que junto con el Fondo de Desastres Naturales constituían los pilares del Sistema de Protección Civil establecido en 1986. El sistema de alarmas sin embargo no se llegó a establecer de forma integral ya que –según investigación del periódico digital [Animal Político](#)-- los radio-receptores adquiridos para el efecto en 2010 nunca fueron instalados. Mas de la mitad de los receptores desaparecieron antes de su entrega o nunca fueron instalados. Estos, sin embargo, podían adquirirse libremente a través de una plataforma electrónica de ventas. Al momento del sismo la mayoría de los receptores en el estado de Oaxaca no se habían instalado, peor aún, las alarmas públicas no cumplieron su cometido por hallarse [fuera de servicio](#) debido a su falta de mantenimiento. Otra investigación periodística encontró irregularidades y “[opacidad](#)” en

la utilización de los dineros públicos destinados a la atención de desastres a través del Fondo de Desastres Naturales (Fonden).

En Ciudad de México autoridades municipales [hicieron caso omiso](#) tanto del estricto código de construcción establecido después del terremoto de 1985 como de la estricta zonificación de la ciudad que de manera bastante precisa delimitó áreas de alto riesgo en donde no se permitirían edificaciones de más de seis pisos. Fue precisamente en estas zonas donde se produjo el mayor número de edificios colapsados incluyendo unos 50 edificios construidos entre los últimos diez años y dieciocho meses. La devastación ocasionada por el sismo de 19 de setiembre no puede pues atribuirse exclusivamente a causas naturales, sea la inusual ruptura de la placa tectónica de Cocos que se extiende a lo largo del Valle Central donde se localiza la Ciudad México, o la inestabilidad del suelo poroso de lo que fuera el lago y sobre el que se edificó la capital, sino que debe también considerarse la responsabilidad de políticos, financistas y constructores participantes centrales lo que la revista *Proceso* acertadamente describe como [“los cimientos podridos del boom inmobiliario.”](#)

Fuera de la capital, en complicidad con autoridades locales, transnacionales mineras, eólicas, gaseras, agroindustriales y de construcción civil beneficiarias de concesiones gubernamentales en tierras públicas, territorios comunitarios indígenas y reservas naturales locales, también hacen caso omiso de disposiciones ambientales, distribución y protección de fuentes hídricas y de los derechos territoriales y políticos de los pueblos indígenas y campesinos. Por su estratégica ubicación inter-oceánica, su riqueza forestal y mineral, por su gran potencial y sus abundantes recursos hídricos, el estado de Oaxaca, así como otros en el sur y sur-este mexicanos, han concentrado la atención de [intereses financieros y estratégicos de las grandes potencias](#). Con el objetivo de atraer capitales el Proyecto Mesoamérica (antes denominado Plan Puebla Panamá) contempla la construcción de carreteras, ferrocarriles, puertos, gaseoductos, hidroeléctricas. De otro lado el gobierno federal se ha propuesto establecer en el sur y sureste del país nueve Zonas Económicas Especiales –dos de ellas en el estado de Oaxaca. Durante la última década el istmo experimentó una rápida expansión de actividades extractivistas contando en la actualidad con veintinueve grandes proyectos mineros y veintiún parques eólicos controlados por corporaciones transnacionales.

Considerada por la mayoritaria población indígena local como punta de lanza de una “reconquista” la expansión de estas empresas se dio a costa del despojo de tierras comunitarias y la pérdida de control comunal sobre cursos de agua y recursos naturales.

Debido a su localización entre dos océanos estos estados son también bastante proclives a inundaciones y deslizamientos de tierras ocasionados por huracanes y tormentas tropicales que durante los últimos años han incrementado su intensidad y frecuencia a consecuencia de la alta temperatura de los océanos a consecuencia del calentamiento global. La destrucción de bosques, explotación de las aguas subterráneas, represamientos, desplazamiento de centros poblados y cambio de curso de arroyos y ríos, como consecuencia de proyectos extractivistas magnifican los efectos destructivos de los fenómenos meteorológicos intensificados como consecuencia del cambio climático. Sin que se hubieran implementado las medidas de prevención y asistencia estipuladas en el protocolo del Sistema Nacional de Protección Civil, las particularmente intensas lluvias e inundaciones de mayo y agosto de este año afectaron severamente a muchas poblaciones en la Sierra Mixe de Oaxaca, así como en la costa y montaña del estado de Guerrero que a principios de setiembre [seguían a la espera](#) de la asistencia para la reconstrucción de caminos y viviendas que supuestamente debería proveer el Fonden.

Dos días después del sismo del 7 de setiembre el jefe de bomberos de la ciudad de Juchitán, la ciudad más importante en el Istmo de Tehuantepec que sufriera la pérdida de 76 vidas y la destrucción de aproximadamente 15,000 viviendas, denunció el fracaso del Consejo Estatal de Protección civil en cumplir con su obligación legal de coordinar la asistencia entre autoridades federales y estatales y las instituciones y autoridades locales. Esto sin embargo no fue un impedimento para que esta misma ciudad y sobre todo sus barrios más destruidos fueran utilizados como “escenografía electoral” para autoridades y políticos de todos los partidos. Fue el caso del mismo EPN que acompañado del también priista gobernador de Oaxaca Alejandro Murat, el día siguiente al terremoto del 7 de setiembre, recorrieron los barrios más devastados acompañados no con personal de asistencia sino por un impresionante contingente de periodistas y camarógrafos. Después de esta rápida y teatralizada visita los Juchitecos tuvieron que esperar varias semanas hasta el arribo de efectiva asistencia del gobierno federal.

Si bien la corrupción, desidia e ineptitud de políticos y burócratas hacia la ciudadanía son ética y moralmente reprobables, estas actitudes son sin embargo consistentes con una cultura política que no solo ha normalizado la corrupción, el pillaje y el desdén hacia el público, sino que además encuentra sustento en la ideología y cultura neoliberales en las que las ganancias e intereses del capital y el individuo predominan sobre el bien común, el bienestar social y el interés nacional.

Desde esta óptica, la catástrofe provocada por los sismos de setiembre más que un inevitable desastre natural constituye más bien un desastre político que tiene su origen en las políticas de un régimen de poder al servicio de grandes intereses financieros y extractivistas quienes sistemáticamente se han opuesto a un ordenamiento territorial y de utilización del suelo respetuoso del medio ambiente, las necesidades, culturas y derechos de las poblaciones locales.

### ***Auto-organización social y resistencias***

Mientras que la asistencia gubernamental demora días en arribar a la región del Istmo de Tehuantepec, una de las zonas más devastadas por el sismo del 7 de setiembre en el estado de Oaxaca, el mismo día del terremoto [la sección 22](#) de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación se declaró en estado alerta y convirtió su local sindical en la capital del estado en centro de acopio para atender la emergencia. Antes de cumplirse una semana el sindicato [distribuyó más de 200 toneladas](#) de alimentos, medicinas y ropa entre los poblados más apartados del Istmo y la Sierra Mixe que sufrieron la destrucción del sesenta al setenta por ciento de sus edificaciones. El 9 de setiembre en Juchitán personal de la marina destacado en la región distribuyó 2000 “despensas” de emergencia. “Ayuda” insuficiente para una ciudad en la que perecieron 76 personas y en la que más de 150,000 perdieron sus hogares y medios de subsistencia.

Fueron más bien organizaciones no-gubernamentales de búsqueda y rescate provenientes de la ciudad de Oaxaca y de estados bastante alejados como los de Jalisco y Nuevo León, las que en Juchitán asumieron las operaciones de rescate desde la noche del día después terremoto. En la vecina ciudad de Ixtepec, el Comité Ixtepecano de Defensa de la Vida y el Territorio -- establecido en el 2008 con el propósito de contener la expansión de proyectos extractivistas en la región – junto con la Sociedad Agrícola y



otras organizaciones vecinales y juveniles se encargaron de la coordinación de la asistencia y remoción de escombros. Brigadas de estudiantes de enfermería y medicina de la ciudad de México arribaron a Ixtepec antes que el personal de instituciones gubernamentales. Similares iniciativas se tomaron en otras regiones de Oaxaca como en otros estados afectados. La auto-organización ciudadana, vecinal y comunitaria respondió de manera más rápida y efectiva que las organizaciones gubernamentales. Mas importante aún fue el hecho que esta fue una movilización desinteresada motivada fundamentalmente por empatía y solidaridad.

A diferencia de los esfuerzos desde la sociedad el gobierno puso énfasis en recabar ayuda y fondos del sector privado a través de la red de oficinas del sistema nacional de Desarrollo Integral de la Familia (DIF) dirigido por la primera dama Angélica Rivera. Al hacerse público a través de las redes sociales que personal de gobierno reempacaba las donaciones en recipientes con el logo gubernamental, del PRI o de políticos locales, el público opto por enviar su donativo a los cientos de centros de acopio y donación establecidos por organizaciones no gubernamentales, iglesias, universidades, locales sindicales y plazas públicas. Esta burda manipulación política de las donaciones, así como el oportunismo puesto de manifiesto por todos los partidos políticos ante el pedido –al final infructuoso—de 3.6 millones de ciudadanos que los 275 mil millones de pesos [presupuestados para las campañas electorales de los partidos](#) sean destinados a las familias damnificadas, así como el hecho que los costos de la reconstrucción estimados en 38 mil millones de pesos son casi equivalentes a los gastos de 37.25 mil millones [incurridos por la presidencia en publicidad](#) durante sus cuatro años en el poder; o que representan apenas una fracción de la friolera de casi 207 mil millones de pesos hechos humo durante la administración de los 10 gobernadores de la llamada [“generación podrida”](#) del PRI, aumentó aún más el desprestigio y rechazo de la ciudadanía a los partidos y al sistema político en su conjunto.

En Ciudad de México el sismo del 19 de setiembre revivió la memoria del aterrador terremoto del 19 de setiembre en Ciudad de México 1985 cuando ante la falta de una oportuna y eficaz intervención por parte de las instituciones gubernamentales, las tareas más urgentes e inmediatas de asistencia y rescate recayeron sobre la una masiva y espontanea auto-organización ciudadana. En defensa de la integridad de los barrios, la

necesidad de una vivienda digna y una estrategia de urbanización democrática se generaron numerosas organizaciones barriales y ciudadanas. Movilización que tuvo un efecto galvanizador en la emergencia del izquierdista PRD –formado por la confluencia de sectores nacionalistas del PRI y partidos socialistas- y su hegemonía en el gobierno de Ciudad de México desde su victoria en las elecciones de 1988 hasta la actualidad. En esta oportunidad la respuesta de la ciudadanía fue también rápida y masiva.

De manera similar a lo ocurrido en Oaxaca en Ciudad de México sobre los hombros de voluntarios locales junto con equipos de rescatistas nacionales y extranjeros recayeron las operaciones de asistencia y rescate de víctimas como consecuencia del terremoto del 19 de setiembre. En su reporte desde las calles de Ciudad de México el periodista uruguayo [Raúl Zibechi estimó](#) en más de cien mil el número de personas movilizadas durante las tempranas horas de la tarde del día del terremoto en las tareas de rescate y asistencia. A pesar de que las grandes televisoras resaltaban hasta el cansancio la presencia de personal de la policía federal y de la marina en las áreas de desastre, nadie dudo que los rescates más difíciles y exitosos fueron ejecutados por grupos civiles, incluyendo a los internacionalmente famosos Topos, una brigada de rescate voluntaria que se formó durante el terremoto de 1985.

Analistas que experimentaron ambas catástrofes remarcan las semejanzas entre estas recientes estas manifestaciones de solidaridad y apoyo desinteresado con aquellas que de manera similar se dieron durante 1985. En esa ocasión, observo [Carlos Monsiváis](#), durante las dos semanas de paralización gubernamental después del devastador terremoto, aproximadamente un millón de personas se movilaron para proporcionar refugio, comida, ropa, atención médica y psicológica a los afectados, así como para remover escombros, rescatar muertos y heridos, y dirigir el tráfico. La respuesta masiva de la ciudadanía, la movilización y auto-organización de vecinos y voluntarios expuso la fragilidad institucional, corrupción moral, y los estrechos intereses económicos del estado mexicano. Mas aun la parálisis gubernamental ante la catástrofe, las restricciones presupuestales impuestas por sus propias políticas de austeridad, el colapso de su capacidad de administrar conflictos sociales, y la pérdida de su autoridad política crearon inmejorables condiciones para el [surgimiento de numerosas organizaciones](#) en defensa de la integridad de los barrios, la necesidad de una vivienda digna y una estrategia de

urbanización democrática. Unificados, bajo la Asamblea de Barrios y el Comité Unificado de Damnificados, los damnificados resistieron el desalojo y forzaron al gobierno a financiar la construcción de 45,000 nuevas viviendas. También se le atribuye a este movimiento un papel central en evidenciar las debilidades y corrupción del sistema político que contribuyeron a crear las condiciones para la llamada “transición democrática,” -- en realidad una apertura y diversificación del sistema electoral hasta ese momento hegemonizado por el PRI. Tuvo asimismo efecto galvanizador en la emergencia del Partido de la Revolución Democrática --formado por la confluencia de sectores nacionalistas del PRI y partidos socialistas. Partido político que ha mantenido la hegemonía sobre el gobierno de Ciudad de México desde su victoria en las elecciones de 1988 hasta la actualidad. La integración de muchos de los dirigentes y organizadores barriales al partido, a la burocracia municipal, y su elección a públicos socavo la autonomía y el eventual debilitamiento de del movimiento barrial.

Reflexionando sobre la movilización ciudadana del 2017 a través de la óptica de sus propias experiencias y de la historia transcurrida desde el terremoto del 1985, el [escritor Pérez Gay asevera](#) con certeza que “el eco de los terremotos llegara a las elecciones del 2018.” Si bien las encuestas unánimemente favorecen a Manuel López Obrador, líder del recién formado Movimiento de Renovación Nacional (MORENA) como desprendimiento del sector a la izquierda de la dirección del PRD el posible impacto de las movilizaciones que siguieron al sismo en el resultado electoral es todavía incierta. Lo que sí es evidente es que, tan solo a tres meses de la catástrofe, la indignación ciudadana y movilización social vienen ensanchando aún más las grietas de la anacrónica y arcaica estructura del sistema de control político-social del PRI-estado, abriendo una excepcional oportunidad para la insurgencia de movimientos ciudadanos y comunitarios en defensa de espacios y territorios de convivencia humana digna, autónoma y democrática.

Basándose en sus experiencias en un barrio popular del centro de Ciudad de México severamente afectado por el sismo de 1985, [el académico y activista H. Cleaver observó](#) que si bien este generó nuevos y complejos peligros e incertidumbres, al mismo tiempo genero también igualmente nuevas y complejas oportunidades. La crisis represento una crisis más que se sumó a las crisis preexistentes creadas por el pago de la

deuda externa y las políticas de austeridad que pusieron al límite las capacidades financieras y políticas del gobierno para atender las demandas de la reconstrucción y la frustración de la población. Para la población afectada en los barrios pobres la crisis los enfrentó a nuevas y complejas dificultades ocasionadas por la falta de vivienda y servicios; la amenaza de demolición y desalojo, de alquileres elevados, la eliminación del subsidio a los alquileres, y la disolución de su vida vecinal/comunal. La parálisis gubernamental ante la catástrofe, las restricciones presupuestales impuestas por sus propias políticas de austeridad, el colapso de su capacidad de administrar conflictos sociales, y la consecuente pérdida de autoridad política, crearon sin embargo una apertura para la movilización. Unificados, bajo la Asamblea de Barrios o el Comité Unificado de Damnificados entre otros, los damnificados resistieron el desalojo y forzaron al gobierno a financiar la construcción de 45,000 nuevas viviendas. Si bien el movimiento vecinal cumplió papel central en evidenciar las debilidades y corrupción del sistema político y en socavar la hegemonía del PRI creando las condiciones para una pactada diversificación partidaria-electoral --mal llamada “transición democrática”-- el movimiento vecinal popular empero perdió ímpetu y autonomía al integrarse muchos de sus dirigentes y organizadores a la estructura partidaria del recién creado Partido de la Revolución Democrática (PRD) y eventualmente a la burocracia municipal de la Ciudad de México.

Tres décadas después y frustradas las expectativas abiertas con lo que en su momento se presentó como el inicio de una “transición democrática” no queda la menor duda que esta fue solo un mito. Lejos de haber puesto coto al autoritarismo, corrupción e impunidad asociados al viejo régimen priista estos no solo han persistido, sino que se han magnificado exponencialmente. Lejos de erigirse en fuerzas opositoras, tanto el derechista Partido de Acción Nacional (PAN) como el izquierdista PRD, el primero desde su control de la presidencia entre el 2000-2010 y este último desde su dominio ininterrumpido que desde 1988 ejerce sobre el gobierno de la urbe capitalina, se transformaron en coparticipantes de los beneficios políticos y económicos, legales e ilegales que históricamente han sostenido el sistema político del estado Mexicano hegemonizado por el PRI desde 1929.

En ese contexto determinado por los depredadores efectos de la modernización neoliberal también tuvo lugar el surgimiento tanto nuevas formas de organización y

movilización social, así como la readecuación de tradicionales organizaciones labores y ancestrales formas comunitarias a las circunstancias políticas actuales marcadas por la expansión de modos de explotación y dominación en beneficio de intereses financieros y extractivistas. Luchas y movilizaciones entre las cuales sobresalen en primer lugar las del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y el Concejo Nacional Indígena (CNI) como la más significativa expresión de la larga tradición de luchas comunitarias en defensa de territorio, cultura y autonomía; las auto-defensas comunitarias en contra de narco-traficantes en varias zonas rurales del país; la tenaz resistencia de los sindicatos magisteriales agrupados bajo la CNTE en contra de la privatización de la educación; la movilización de los padres de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa. Luchas que en su conjunto han contribuido a profundizar la deslegitimización del sistema político al que el estrepitoso fracaso de sus políticas de control de la violencia, el narcotráfico y la corrupción; y de privatización del sector energético y la educación pública de EPN bien pueden significar –en palabras de Ackerman—“el principio del fin de la democracia simulada que hoy mantiene en sus cargos a toda la caduca clase política. \*1”

Pasados más de dos meses de la catástrofe las manifestaciones de indignación y desconfianza con la intervención estatal, visibles desde los primeros momentos después de los sismos, no solamente se han multiplicado, sino que amenazan en transformarse en un serio obstáculo a los programas de reconstrucción gubernamentales. [Damnificados en la delegación Benito Juárez](#) de Ciudad de México acampados en las inmediaciones de sus viviendas en ruinas se resisten a abandonarlas ya que de hacerlo –en voz de uno de los afectados—“es dejar que las constructoras se apoderen de los predios.” En [San Dionisio del Mar](#) comunidades ikoot, movilizadas desde 2012 en defensa de sus territorios amenazados por la expansión de proyectos transnacionales de “energía limpia,” señalan que los programas de asistencia del gobierno obedecen a estrategias para provocar mayor “fragmentación y sometimiento de pueblos en resistencia en defensa de su territorio.” Argumentos y observaciones que viniendo de comunidades hartas experimentadas con las letales y duras consecuencias de las devastadoras consecuencias de la modernización neoliberal no dejan la menor duda sobre la naturaleza de la estrategia gubernamental de reconstrucción que recién inicia.

---

\* John M. Ackerman. [El mito de la transición democrática](#). Mexico, 2015, p. 227

Estrategia que guarda alarmante semejanza con similares procesos surgidos en las últimas décadas en situaciones de reconstrucción que han seguido a conflictos bélicos, conflictos internos o catástrofes naturales sea con el objetivo de imponer o intensificar regímenes de explotación y opresión neoliberales. Bajo control de lo que [Shalmali Guttal](#) denomina como “industria de la reconstrucción” –conglomerado de intereses financieros, inmobiliarios, ONG y agencias internacionales – cuyo principal objetivo no es la reedificación material de lo devastado sino la transformación misma del “tejido social” en beneficio de gran capital. Proceso que, según este analista, representa –sobre todo para las naciones del Sur Global—una nueva y sofisticada forma de colonialismo.

Aprovechando el estado de shock y la situación de miedo e incertidumbre en que se encuentran las poblaciones en la región del Istmo –a la vez una de las más afectadas y de mayor importancia estratégica para el gran capital— el gobierno mexicano apura las demoliciones e incrementa su presencia con el propósito de doblegar la tenaz y persistente resistencia de los pueblos a la expansión de industrias extractivas en curso durante las dos últimas décadas. Dos días después el empresario oaxaqueño y alto funcionario del gobierno federal [Gerardo Gutiérrez](#) [declaro](#) que la mejor forma de reactivar la recuperación económica era acelerando la declaración de Zonas Económicas Especiales en las costas de los estados de Chiapas y Oaxaca como la mejor forma de “atraer la inversión y crear fuentes de empleo.”

En Ciudad de México organizaciones vecinales [en nutrida manifestación](#) llevaron su descontento hasta las mismas puertas de la Bolsa Mexicana de Valores – la institución representativa de los intereses que más se beneficiaran de la estrategia gubernamental de reconstrucción. La recién formada [Asamblea Nacional Ciudadana](#), que agrupa decenas de organizaciones sociales y sindicales, rechaza también todo programa que beneficie a bancos y empresas inmobiliarias. Demanda se declare la moratoria del pago de los intereses de la deuda externa por un año y que ese monto se destine a la reconstrucción de infraestructura y la financiación de la construcción de viviendas para ciudadanos de ingresos bajos y medios. Como alternativa plantean la formulación, con participación y fiscalización ciudadana, de una estrategia de reconstrucción de ciudades y comunidades integral, incluyente y democrático.

Aunque desde una posición de desventaja –como es el caso de vecindades y muchos otros pueblos en las regiones afectadas-- los pobladores del Istmo han asumido la crisis ocasionada por la catástrofe como una oportunidad de fortalecer su tejido comunitario a través de una reconstrucción participativa, autogestionaria, democrática. En el municipio de San Mateo del Mar, una de las más celosas y militantes comunidades istmeñas zonas del Istmo en la defensa de su autonomía territorial y cultural, la intención de las fuerzas navales enviadas con el objetivo de crear un albergue fue superada por los propios esfuerzos de la organización comunitaria. Arguyendo que las aceleradas demoliciones sin un exhaustivo e imparcial peritaje favorecen solo a los proveedores de materiales de construcción y que ocasionarían una irreparable a la memoria histórica de los pueblos originarios las localidades istmeñas de Ixtaltepec, [Unión Hidalgo](#), Juchitán e Ixtepec se conformaron consejos comunitarios para impedir la demolición de viviendas con “estilo arquitectónico vernáculo regional.” En esta última población sus organizaciones sociales y comunitarias constituyeron un [Consejo de Reconstrucción y Fortalecimiento Comunitario](#) que al mismo tiempo que resiste las demoliciones ha puesto en marcha, con donaciones de organizaciones solidarias y apoyo de especialistas, un proyecto autogestionario que incluye tanto la reconstrucción de viviendas como las necesidades culturales y comunitarias.

### *Relámpagos bajo la tormenta ...*

Así como la catástrofe sísmica sin lugar a dudas profundizara aún más la crisis de la modernización neoliberal mexicana, ésta también da visibilidad a actores políticos sistemáticamente marginalizados o menospreciados cuyas formas de encarar la crisis de manera autónoma, auto-sostenida y subordinada a los intereses comunitarios representan una alternativa no solo ante el sismo sino también a la posibilidad de articular una salida alternativa a la crisis. En las difíciles circunstancias globales en las que el fin de la vida sobre el planeta dejó de ser una profecía y en la que el surgimiento del fascismo es ya una realidad, las resistencias aquí reseñadas –parafraseando a Adolfo Gilly—nos indican también que este “planeta sin ley” ya no se viven tiempos de esperanza y que más bien “es ahora el tiempo de la ira y de la rabia. La esperanza invita a esperar; la ira a organizar.” En este sentido México no vendría sino a representar un escenario más de lo

que los zapatistas describen como la “cuarta guerra mundial” en la que la batalla por controlar, dominar y domesticar los recursos humanos y naturales de todo el planeta en beneficio de los grandes intereses financieros constituye una prueba de fuego tanto para la oligarquía financiera global y su aparato represivo, como para las fuerzas político-sociales movilizadas en defensa de la vida, la autonomía, la paz y la democracia.

*San Felipe del Agua, Oaxaca, México.*